



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  
SALA LABORAL

Medellín, marzo 16 de 2023

Radicado: 05001 31 05 008 2019-00475 01  
Accionante: JUAN FELIPE LONDOÑO ARANGO  
Demandado: GLOBAL SECURITIES SAS  
Asunto: PROCESO EJECUTIVO – MANDAMIENTO DE PAGO

La Sala Sexta de Decisión, presidida por el magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN, e integrada por las magistradas MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA Y la Dra. ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, procede a emitir la providencia dentro del proceso ejecutivo laboral de la referencia. Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencien causales de nulidad que invaliden lo actuado, se genera la decisión.

**ANTECEDENTES**

Dentro del proceso ejecutivo laboral la parte accionante pretende la satisfacción de las condenas emitidas en el proceso ordinario laboral de radicado 05001-31-08-2014 - 01772, donde se estableció el deber de la sociedad accionada de reconocer los aportes al sistema de seguridad social en pensiones causados entre el 06/09/2011 al 27/01/2014 a través de la AFP Protección. Expuso la accionante que la AFP liquidó el cálculo actuarial el que sumando el capital e intereses causados al 15/08/2019 asciende a \$114'981.708.

En providencia del 22 de noviembre de 2019 se libró mandamiento de pago en contra de la sociedad ejecutada estableciendo la obligación de pago de la suma antes mencionada, más los intereses de mora causados desde el 15 de agosto de 2019 hasta el pago de los créditos adeudados. Como medida cautelar se dispuso el embargo y

secuestro del establecimiento de comercio de Global Securities SA Comisionista de Bolsa y el embargo en algunas cuentas bancarias limitando a la suma de \$130'000.000 (pág 21/25 archivo N° 8)

Luego de notificada la acción ejecutiva, la pasiva presentó los recursos de reposición y apelación contra el mandamiento de pago indicando que del contenido de las sentencias que se ejecutan se desprende que se dispuso el pago de la reliquidación de aportes al sistema pensional sin lugar a intereses, advirtiendo que la sociedad accionada ya pagó los aportes, y el documento que contiene la liquidación del monto perseguido no hace parte de la sentencia, por tanto no constituye un título susceptible de cobrarse por esta vía. De igual forma solicitó el levantamiento de las medidas cautelares (pág 53/58 archivo N° 8)

A la vez presentó excepciones frente a la orden de ejecución, insistiendo en la satisfacción de las condenas, la improcedencia de la ejecución incorporando como documento base de recaudo la liquidación efectuada por la AFP al no hacer parte de la sentencia (pág 128/136).

Luego en auto del 23 de septiembre de 2022 se negó la petición de reposición al mandamiento de pago, esto de cara al artículo 23 de la Ley 100 de 1993 que establece la forma en que se recaudan los aportes en mora del sistema pensional, la que alude a la causación de intereses.

Señaló que en el presente evento el título base de ejecución se compone de: 1). las sentencias que declararon la connotación salarial de las bonificaciones, con sus condenas, en particular los ajustes a los aportes en pensiones y 2). la liquidación elaborada por la AFP Protección y aportada por el ejecutante donde se concreta la forma en que ha de satisfacerse el pago del reajuste en los aportes. Así las cosas, negó la reposición y concedió el recurso de apelación.

## **ALEGATOS**

Concedido el término que establece el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 la ejecutada reiteró los argumentos de disenso.

## CONSIDERACIONES

Corresponde a esta corporación resolver sobre los reparos propuestos contra el mandamiento de pago, aspecto que de cara al numeral 8 del artículo 65 del CPTSS es susceptible del recurso de alzada.

Ahora bien, se encuentra por fuera de discusión que: **1)** La condena que da lugar a esta ejecución se generó en las sentencias del 29 de agosto, confirmada por esta corporación el 13 de febrero de 2019, donde se estableció el carácter salarial de las bonificaciones y que incide en el pago de aportes al sistema de seguridad social en pensiones, sentencia que estableció los ciclos en que se debe reajustar los aportes, así como la base de cotización y **2)** que la parte actora acude al trámite ejecutivo a efectos de obtener el pago de las sumas que fueron liquidadas por la AFP Protección como reajuste de las cotizaciones (pág. archivo N° 8 )

Así las cosas, corresponde a esta corporación pronunciarse sobre los reparos propuestos por la pasiva que se concretan en la existencia del título base de recaudo

Sobre la existencia del título ejecutivo señala el artículo 100 del CPTSS que serán exigibles ejecutivamente toda obligación que esté contenida en una decisión judicial.

Descripción que revela los elementos mínimos que debe contener aquel documento o acto que se pretenda para cumplimiento a través del proceso ejecutivo laboral y que se sintetizan en tres aspectos primordiales a saber: 1) una obligación expresa, 2) clara y 3) actualmente exigible.

Se trata de requisitos que han de reunirse de forma conjunta y suficiente y a través de los cuales se decantan aquellos reclamos donde no se discute la existencia de una obligación, tampoco está en duda los sujetos obligado (s) y beneficiario (s), se tiene certeza en el monto adeudado y/o obligación debida, así como la fecha de exigibilidad. Reclamaciones donde es inane la discusión sobre la configuración de la obligación, pues tales elementos se establecieron con suficiencia en un documento que se presenta como base de recaudo.

Ahora bien, respecto a los requisitos expuestos, ilustrativa es la decisión de la Sala de Casación Civil de la CSJ del 24 de junio de 2021, donde se describió el contenido de los presupuestos del título valor, indicando que una obligación es **clara** cuando su contenido es inequívoco, no es oscuro y por tanto no es susceptible de interpretaciones disímiles. Define la **expresividad** de la obligación como la suficiencia de los términos en que se consigna sin que sea menester acudir a teorías o hipótesis, sino que es diáfana la manifestación del deudor en favor del acreedor. y en cuanto a la **exigibilidad**, consiste en la posibilidad de reclamar la satisfacción de la obligación dada la expiración del plazo o cumplimiento de la condición que mediaba para obtener su satisfacción. Así indicó la alta corporación:

*“Los requisitos impuestos a los títulos ejecutivos, consignados en el artículo 422 del Código General del Proceso, relativos a tratarse de un documento proveniente del deudor o de su causante en donde conste una obligación clara, expresa y exigible, por supuesto se trasladan a los títulos valores y, en esa medida, si el instrumento no satisface tales presupuestos, no puede seguir adelante el cobro coercitivo (...).”*

*“(...) La claridad de la obligación, consiste en que el documento que la contenga sea inteligible, inequívoco y sin confusión en el contenido y alcance obligacional de manera que no sea oscuro con relación al crédito a favor del acreedor y la deuda respecto del deudor. Que los elementos de la obligación, sustancialmente se encuentren presentes: Los sujetos, el objeto y el vínculo jurídico. Tanto el préstamo a favor del sujeto activo, así como la acreencia en contra y a cargo del sujeto pasivo (...).”*

*“(...) La expresividad, como característica adicional, significa que la obligación debe ser explícita, no implícita ni presunta, salvo en la confesión presunta de las preguntas asertivas. No se trata de que no haya necesidad de realizar argumentaciones densas o rebuscadas para hallar la obligación, por cuanto lo meramente indicativo o implícito o tácito al repugnar con lo expreso no puede ser exigido ejecutivamente. Tampoco de suposiciones o de formulación de teorías o hipótesis para hallar el título. Y es exigible en cuanto la obligación es pura y simple o de plazo vencido o de condición cumplida (...).”<sup>1</sup>*

Recientemente, sobre esa temática, la Corte adocrinó:

*“(...) Tocante al carácter de la expresividad del documento adosado como báculo del compulsivo, la obligación que se pretende ejecutar con fundamento en su contenido incumple esa condición, pues no basta estar inserta por escrito o, derivarse de la confesión ficta, por cuanto debe obrar una manifestación del deudor, en favor del acreedor, de cumplir con un propósito preciso, puntual y, concreto, que no requiera de intrincadas elucubraciones sobre los pormenores del compromiso”.*

*“Aun cuando ello se puede lograr con varios documentos, es decir, el caso del título complejo, tal cuestión significa que, al articularlos, la obligación surja*

*prístina; por tanto, si en conjunto, se requiere efectuar una interpretación más allá del tenor literal del contenido de la obligación de dar, hacer, no hacer o, de suscribir documentos, estará insatisfecho el requisito expreso del título”.*

Se destaca que la esencia del título ejecutivo no excluye la conformación de títulos complejos donde la obligación y forma de cumplirla se halla inserta en diferentes fuentes, cuestión que ocurre en el presente evento en tanto la obligación fue definida en la sentencia, pero la forma en que se cumplirá requiere de etapas adicionales, esto es la liquidación del cálculo actuarial.

Al respecto resulta relevante la decisión en sede constitucional de la Sala de Casación Penal SPT 13812 de octubre 6 de 2022 donde en un caso con idénticos contornos, esto es la ejecución de la sentencia que impuso el pago de aportes en pensiones, se presentó para su ejecución, además de la sentencia, la liquidación del cálculo actuarial realizado por la AFP a la que estaba afiliado el accionante. En su decisión el juez de tutela halló razonable que se librara mandamiento de pago con base en ambos documentos en tanto permiten establecer los términos de cumplimiento de la obligación, así:

*“4.8. De manera que, como lo concluyó la Sala A quo constitucional, el Tribunal demandado emitió la decisión a cuestionada bajo un razonado análisis, que se encuentra soportado a un análisis consistente y basado de forma sólida en la sana crítica del juez colectivo, pues, en concreto, se hallaron demostrados los requisitos necesarios para emitir auto de mandamiento de pago en contra de la empresa aquí accionante, al constituirse el título complejo necesario para ello por la parte activa del proceso ejecutivo, conformado por la sentencia de condena ordinaria de 27 de julio de 2019 y el cálculo actuarial emanado de PORVENIR S.A., de 6 de mayo de 2021”.*

Con estas premisas se descende al **caso concreto** verificando que los documentos base de ejecución: las sentencias de primera y segunda instancia, aunados a la liquidación de cotizaciones elaborada por la AFP Protección; definen la obligación a satisfacer, en tanto la sentencia de primera instancia determinó los factores a tener en cuenta para el cumplimiento de la obligación, los extremos en que deberían realizarse las cotizaciones en pensiones, el salario base de cotización para cada anualidad; la parte obligada a satisfacer tal carga y en favor de quien operaba este beneficio y la entidad intermediaria para dar cumplimiento a la orden, así indicó el numeral quinto de la sentencia:

*QUINTO: CONDENAR a la sociedad GLOBAL SECURITIES SA COMINISIONISTA DE BOLSA a reconocer y pagar con destino al fondo de pensiones al cual se encuentre afiliado el actor, la reliquidación de los aportes en pensión teniendo en cuenta las sumas recibidas por participación de utilidades*

*desde el 6 de septiembre de 2011 al 27 de octubre de 2014....” (pág 191/194-archivo N° 2)*

A su vez el documento elaborado por la AFP Protección adiado del 10 de julio de 2019 informa sobre la liquidación de los mentados aportes, estableciendo además del capital, los intereses que tales cotizaciones han generado al 15 de agosto de 2019, que totalizaron para tal data la suma de \$114'981.708 (pág 6/8 archivo N° 8).

Se revela con claridad la obligación y forma de cumplirla, sin que sea del caso señalar que los intereses de mora no hacen parte de la misma en tanto el artículo 23 de la Ley 100 de 1993 define la forma en que se satisface la mora en el pago de aportes al sistema de seguridad social en pensiones, los que generan un interés moratorio a cargo del empleador, igual al que rige para el impuesto sobre la renta y complementarios; intereses que se abonarán en el fondo de reparto correspondiente o en las cuentas individuales de ahorro pensional de los respectivos afiliados, según sea el caso.

Norma que se incorpora a la decisión que se busca su cumplimiento, no solo porque fue este el sustento de la sentencia, pero además porque se trata de una regla imperativa que gobierna el cumplimiento de los aportes en mora, intereses de mora que permiten que las cotizaciones atrasadas ingresen al capital que financiará las eventuales prestaciones del sistema pensional.

Por último, no descarta esta corporación que existan reparos a la satisfacción de la obligación, tal como lo expone el recurrente al afirmar que ya pagó los aportes en mora, empero tal reproche corresponde a una etapa diferente a la verificación de validez del mandamiento de pago, por lo que el ejecutante podrá hacer valer su tesis y argumentos probatorios dentro de la etapa de proposición de excepciones o aun en la liquidación del crédito presentando entre otros elementos, un cálculo actuarial que estime es correcto, lo que no corresponde a una nueva discusión sobre la existencia del derecho, sino a la forma en que conforme a los parámetros de la sentencia, se debe satisfacer la obligación.

En suma, toda vez que la obligación que ahora se ejecuta comporta un título complejo integrado por la sentencia y la liquidación del cálculo actuarial elaborado por la AFP a la que se encuentra afiliado el señor Londoño Arango, obligación que incluye además del importe de las cotizaciones los intereses causados por el tiempo de mora, se

concluye que fue ajustada a derecho la decisión de la A quo de librar mandamiento de pago, sin que en esta etapa deba realizarse un análisis de satisfacción de la obligación lo que corresponde a una fase posterior.

Costas en esta instancia a cargo de la parte ejecutada, de las que se fijan las agencias en derecho en la suma de 1 SMLMV

En mérito de lo expuesto, **LA SALA SEXTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, CONFIRMA DE FORMA TOTAL** la decisión apelada, disponiendo la continuidad del trámite ejecutivo

Costas en esta instancia a cargo de la demandada, de las que se tasan las agencias en derecho en la suma de 1 SMLMV.

Lo resuelto se notifica a las partes en estados. Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen para lo de su competencia.

Los Magistrados,

  
**DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN**

  
**MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**

*Sin firma por ausencia justificada*  
**ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ**

CERTIFICO: Que la anterior providencia fue notificada en Estados publicados por medios digitales el 28 de marzo de 2023